

ROJO Y NEGRO

ANARCOSINDICALISMO EN ACCIÓN

ESPECIAL MOVILIZACIÓN CLIMÁTICA - NOVIEMBRE 2025



**El clima exige acción,
el futuro esperanza**



www.rojoynegro.info | www.cgt.org.es

COP30 en Brasil: la lucha climática global en quiebra

La próxima Asamblea de la Partes sobre el Cambio Climático, en Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña, debería representar un punto de inflexión en la lucha climática global. Sin embargo, la cumbre llega precedida de una geopolítica preocupante, discursos negacionistas renovados y una parálisis política que amenaza con convertir esta cita crucial en otro ejercicio de retórica vacía.

Aunque la crítica a estos espacios es más que justificada, la realidad es que solo una respuesta multilateral de todos los países podrá enfrentar la emergencia climática. La respuesta ante estos retos debe ser más diálogo frente al unilateralismo, pero también de que este se vea acompañado de herramientas vinculantes que eviten, como está pasando, que cualquier avance se convierta en papel mojado antes los delirios megalómanos y asesinos de algunos líderes mundiales.

Hipocresía y negacionismo

Que la COP30 se celebre en la Amazonía es, en principio, una buena noticia. Acercarse a los pueblos originarios, primeros impactados por la crisis climática y custodios de conocimientos tradicionales esenciales, debería marcar un cambio de enfoque. Pero la contradicción es flagrante: el gobierno brasileño tras entrar en la organización de países petroleros acaba de autorizar nuevas exploraciones de hidrocarburos a pocos kilómetros de Belém, precisamente en el delta del Amazonas. ¿Cómo pretende Brasil liderar la protección climática mientras abre nuevos pozos petrolíferos en la puerta de la cumbre?

La administración Trump ha vuelto con su obscuro "drill, baby, drill", apostando nuevamente por una economía obsoleta y profundamente temeraria para el futuro de la humanidad. No se trata solo de continuar con los combustibles fósiles: es la voluntad deliberada de sabotear cualquier progreso climático global. Los intereses petroleros estadounidenses no pueden secuestrar una vez más las negociaciones internacionales. La comunidad internacional no puede mirar a otro lado y debe plantearse medidas políticas, diplomáticas y económicas para evitar que la Casa Blanca bloquee acuerdos vitales para el planeta.



Pero no podemos señalar solo a Estados Unidos. El retraso de muchos países en presentar sus nuevos compromisos —primero en febrero, luego en las prórrogas de junio y septiembre— constituye un incumplimiento claro de las normas del Acuerdo de París. Este acuerdo, a diferencia del Protocolo de Kioto, no es un tratado de objetivos fijos, sino un proceso de revisión cíclico cada cinco años que debía iniciarse precisamente en la COP30 con un informe sobre el estado real de la lucha climática. Ese informe, si llega, no será fidedigno y no nos permitirá sacar las conclusiones adecuadas para actuar con la urgencia que la situación requiere.

Especialmente preocupante es la falta de liderazgo de la Unión Europea, que tanto presume de ambición climática. La incapacidad de pactar un objetivo vinculante para 2040, bloqueado por la acción retardista y negacionista de los partidos de derecha, muestra un giro muy preocupan-

te para el futuro de la humanidad. El giro a la derecha en Europa ha impedido la aprobación de una estrategia climática a largo plazo ambiciosa, llenándola de agujeros y excepciones que la vuelven ineficaz. El gobierno de Sánchez debe de estar a la altura de sus palabras, particularmente en el contexto europeo en el que es de los pocos "progresistas" y debe liderar la recuperación de la ambición y el liderazgo que dice tener, empezando por el ejemplo concreto.

Financiación climática: migajas disfrazadas de solidaridad

La cumbre debe afrontar de manera seria la financiación climática internacional. Existe una obligación histórica de reparaciones del norte global, pactada en la Cumbre de Río de Janeiro, que los países ricos siguen esquivando. El acuerdo del año pasado de triplicar la financiación pública es un ejemplo de la insuficiencia

de los fondos ya que apenas supone un incremento real del esfuerzo y está muy lejos de los más de 10 millones de millones que se necesitarían anualmente.

Ante esta falta de financiación se acordó en Bakú 1,3 millones de millones de financiación total, pero muchos de estos fondos no provenirán de la cooperación pública pactada en París de solo 300.000 millones, sino de fondos privados que exigen contraprestaciones como los mercados de carbono u otras compensaciones que debemos rechazar rotundamente. Aunque se han ido estableciendo salvaguardas para evitar la usura en esta financiación necesaria, la realidad es que estamos muy lejos de alcanzar una reforma de los mercados de deuda y otras medidas fiscales que deberían ponerse en marcha para que muchos países afronten esas inversiones. De hecho, si analizamos con detalle el destino de estos fondos vemos cómo ▶



muchos de ellos tienen como destino países de rentas medias con alta rentabilidad, en lugar de ir destinados a las poblaciones más vulnerables.

La adaptación climática requiere indicadores robustos y la duplicación de fondos prometida en Glasgow, fundamental para países africanos que ya sufren enormemente las consecuencias. El fondo para pérdidas y daños debe ser una realidad operativa, no otra promesa vacía.

Las expectativas son bajas. La presidencia brasileña no está abordando los temas de negociación centrales, centrándose en instrumentos multilaterales como la Tropical Forest Facility, cuya propuesta final aún desconocemos. Mientras tanto, hace numerosos guiños a grandes empresas contaminantes que deberían estar expulsadas de las negociaciones, tal como hizo la Organización Mundial de la Salud con la industria tabacalera en 2008.

La sociedad civil y la transición justa: nuestra última esperanza

Ante esta incapacidad de los gobiernos, la sociedad civil saldrá nuevamente a las calles de Belén para denunciar la parálisis política. La cumbre será una oportunidad para encontrarse con pueblos originarios y comunidades que sufren los impactos climáticos, para amplificar sus demandas claras y legítimas.

El único rayo de esperanza real es la aprobación del Mecanismo de Belén para la Transición Justa, el único documento que debe cerrarse obligatoriamente en estas negociaciones. El texto que salió de Bonn era lo suficientemente integrador para dar una respuesta a esa transición tan necesaria: no solo formación de trabajadores, sino debe ser un avance claro para cumplir con el acuerdo de Dubái de poner fin a los combustibles fósiles. Este programa debería dar un mecanismo

capaz de acelerar reducciones rápidas de emisiones y acompañándolo de las medidas de financiación, protección de las trabajadoras e implementación de los principios de justicia climática.

La COP30 no puede ser otra cumbre de palabras bonitas y compromisos tibios. Necesitamos que los países abandonen los discursos negacionistas, que los intereses de Trump no secuestren las negociaciones y que la Unión Europea retome el liderazgo que presume tener con posiciones realmente ambiciosas. El tiempo de las excusas se ha acabado. Belén debe ser el lugar donde la comunidad internacional demuestre que todavía es capaz de actuar a la altura de la emergencia climática que vivimos. De lo contrario, habremos perdido otra oportunidad que el planeta no puede permitirse. ■

Javier Andaluz Prieto
Coordinador de Alianza por el Clima

Alianza por el Clima es la mayor plataforma ciudadana por la justicia climática en el Estado español. Nació en 2015, al calor de la COP21 de París, para unir voces y empujar a las instituciones a actuar con la ciencia como guía y los derechos en el centro. Hoy agrupa a decenas de colectivos y opera como espacio de coordinación, incidencia y movilización: elabora propuestas, vigila leyes y baja a tierra el lenguaje técnico en demandas claras.

¿Quiénes la integran? Un abanico amplio y complementario: grandes organizaciones ecologistas; plataformas por la transición energética; redes de desarrollo rural y de agricultura ecológica; sindicatos; asociaciones de consumidores; entidades de educación ambiental; organizaciones feministas y juveniles, organizaciones de cooperación para el desarrollo, etc. Esta diversidad no es estética: es músculo social para forzar políticas públicas que estén a la altura de la emergencia.

¿Objetivos? Aterrizar el 1,5 °C en medidas concretas. Eso significa eliminar progresivamente los combustibles fósiles con plazos y presupuestos; desplegar renovables con criterios sociales y ambientales, priorizando ahorro y eficiencia; defender la biodiversidad y el territorio; transitar hacia la agroecología y proteger la salud frente a la contaminación. Todo ello con justicia climática: empleo digno, reducción de desigualdades, participación democrática y garantías para que nadie quede atrás. Y con financiación real, pública y suficiente para la adaptación y para pérdidas y daños, sin trampas de mercadeo de carbono ni falsas compensaciones.

Es una herramienta común. Cuando la Alianza convoca, sindicatos, colectivos y vecindario se alinean para pasar de las palabras a los hechos. El clima se defiende cada día, desde leyes y presupuestos hasta la vida en los barrios. Ahí radica su fuerza —y nuestra responsabilidad—: sostener una alianza viva, amplia y exigente que ponga la justicia por delante del greenwashing. Todo lo demás son excusas.

Cumbres que no enfrían el clima

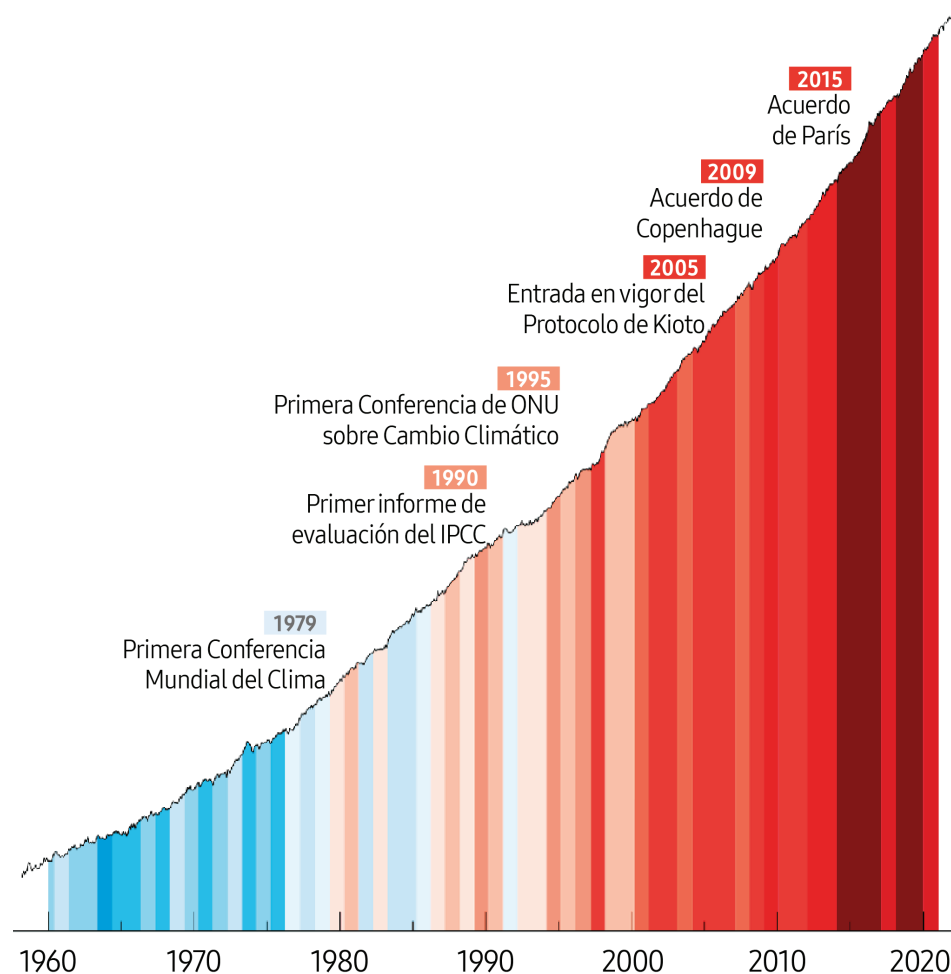
Esta gráfica de la revista noruega *Bergensia* —que superponen los hitos de las COP a ese enrojecimiento— nos recuerdan algo incómodo: el mundo debate, promete y negocia, pero la realidad no cambia.

El contexto científico reciente no deja margen para la autocomplacencia. La Organización Meteorológica Mundial (WMO) confirmó que 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, con una anomalía cercana a 1,45°C sobre la era preindustrial. 2024 encadenó récords de concentración de CO₂ y la propia WMO ha comunicado la mayor subida anual de CO₂ jamás medida. Traducido: incluso con emisiones fósiles que ya no crecen al ritmo de hace una década, los sumideros naturales (bosques, océanos) absorben menos. A escala cotidiana, eso significa más olas de calor, más riesgo para la salud y más pérdidas económicas, con el Sur global y las comunidades vulnerables llevándose los golpes más fuertes.

La Cumbre de Río (1992) parió la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático e introdujo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”: todos debemos actuar, pero no en igualdad de condiciones ni con la misma carga histórica. Kioto dio el primer salto a metas vinculantes para países industrializados y París (2015) universalizó el esfuerzo con los compromisos nacionales (NDC) y el objetivo de mantener el aumento “muy por debajo” de 2 °C, procurando 1,5 °C. Sin embargo, el paso de lo declarativo a lo operativo no se ha materializado: promesas sin planes suficientes, metas sin financiación adecuada y lagunas que han permitido mantener el consumo de combustibles fósiles.

Las últimas cumbres ilustran bien esa tensión entre el avance en el lenguaje y la brecha en la implementación. En Dubái (COP28), por primera vez se invitaba a “transicionar lejos de los combustibles fósiles” y a triplicar renovables y duplicar la eficiencia antes de 2030. Al mismo tiempo, se operacionalizó el Fondo de Pérdidas y Daños con promesas iniciales en torno a 700 millones de dólares. El relato oficial convive con la letra pequeña: sin un calendario de eliminación, sin frenar nuevas expansiones fósiles y con financiación muy por debajo de las necesidades, la brújula apunta, sí, pero la maquinaria global apenas gira.

Las “barras de la inacción climática” pueden parecer una infografía bonita: franjas azules que se tornan rojas a medida que avanza el tiempo. Pero su mensaje es áspero: durante casi dos siglos la temperatura media del planeta no ha dejado de subir.



En Bakú (COP29), la conversación se centró en un nuevo objetivo de financiación climática (el NCQG). El resultado fue un acuerdo que los medios resumieron como “300.000 millones de dólares al año de aquí a 2035” con la aspiración de movilizar 1,3 billones en total. Los gobiernos presentaron aquello como un arran-

que realista en tiempos de tensiones geopolíticas. Sin embargo, para amplias coaliciones del Sur global y para las principales redes ecologistas se quedó muy corto. Las necesidades superan el billón anual solo en financiación pública si queremos sostener adaptación, transición energética y pérdidas y daños sin endeudar países

ya ahogados. La conclusión es que si el dinero no llega a tiempo y en la forma adecuada, la curva de emisiones no remitirá a la velocidad requerida.

¿Y qué dicen las organizaciones ambientales? Ecologistas en Acción calificó el acuerdo de Dubái como “decepcionante, insuficiente y plagado de coladeros”. Vio por primera vez la dirección correcta escrita, pero también demasiadas puertas abiertas a “soluciones tramposas” y a seguir retrasando la salida de los fósiles. Greenpeace habló de una señal para la industria fósil —reconocer la transición— que llega sin el músculo regulatorio y financiero para hacerla justa y rápida. Amigas de la Tierra puso el foco en la prisa por aprobar reglas que, en su opinión, no reducen emisiones reales, abren la puerta a acaparamiento de tierras y vulneran derechos indígenas. La Climate Action Network (CAN) fue más lejos en su balance de Bakú: “traición” de los países ricos al no anclar un objetivo de financiación acorde a su responsabilidad histórica. Todo ello mientras la presencia récord de lobbies fósiles en las cumbres alimenta la percepción de captura del proceso.

Visto desde el Sur global, la foto es aún más cruda. La puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños fue un hito simbólico de justicia climática; pero con montos que no alcanzan ni de lejos la magnitud del problema, y un diseño que a menudo mezcla ayudas con préstamos. El riesgo es cronificar la desigualdad con deuda nueva. En paralelo, la adopción “expres” de reglas para créditos de carbono en la COP29 reavivó temores sobre proyectos que, bajo la etiqueta climática, terminan despojando a comunidades campesinas e indígenas de su territorio. Sin financiación suficiente y sin garantías sociales, la inacción se mide en vidas.

La última palabra —también en España— es política y está anclada en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”: más ambición y coherencia a los Estados, pero también a las comunidades autónomas y ayuntamientos que planifican usos del suelo, movilidad y energía; y más responsabilidad —con obligaciones exigibles— a las empresas que hoy aún obtienen rentas de la inercia fósil. ■

Andrés Amayuelas
SU CGT Burgos

Transición justa: una idea obrera que hoy exige justicia climática decolonial

En los 90, en plena ofensiva del “empleo contra el planeta”, un sindicalista estadounidense, Tony Mazzocchi, lanzó una pregunta incómoda: si existe un Superfondo para limpiar suelos contaminados, ¿por qué no un “superfondo para las trabajadoras y trabajadores” obligados a salir de industrias tóxicas?

Aquella intuición —proteger a quienes sostienen la vida cuando cerramos lo que la envenena— cristalizó en un concepto que hoy recorre el planeta: **Transición Justa**. Nació en el sindicalismo, como respuesta materialista a un dilema fabricado por las patronales: o pan o planeta. La respuesta obrera fue otra: pan y planeta, con derechos.

Del “Superfund for Workers” a un marco global

Mazzocchi, dirigente de OCAW (Oil, Chemical and Atomic Workers), acuñó la idea en los 70-90: si la regulación ambiental es necesaria, entonces el Estado debe garantizar ingresos, formación, recolocación y jubilaciones dignas a quienes se vean desplazados por el cierre o transformación de actividades peligrosas. A eso lo llamó primero “Superfund for Workers” y poco después Just Transition. La propuesta desactivaba la trampa “empleo vs. ecología” y colocaba el riesgo corporativo donde toca: en las empresas que se lucran contaminando, no en las espaldas de las trabajadoras.

Desde entonces, la Transición Justa fue adoptada por el movimiento obrero internacional y entró en la arquitectura de políticas públicas. La OIT aprobó en 2015 sus Directrices para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles, que hablan de diálogo social, derechos laborales, protección social y políticas activas de empleo. No es caridad ni “reconversión exprés”: es un pacto social con obligaciones públicas y empresariales.

IWW: sindicalismo verde de clase

En esa genealogía destaca el Environmental Unionism Caucus (EUC) de la IWW. Heredera de un sindicalismo de clase combativo que entiende la producción como terreno de lucha, la IWW impulsó un unionismo ecológico que une trabajadoras y comunidades para transformar —o cerrar— sectores que no cumplen estándares laborales y ambientales. El EUC, activo desde comienzos de la década de 2010, lo formuló sin rodeos: hay que organizar para forzar cambios de modelo productivo y poner la salud y el empleo digno por delante del beneficio. Esta línea bebe, además, del puente que figuras como Judi Bari tendieron entre sindicalismo y ecologismo de acción directa.

Just Transition Alliance

La expansión del marco vino también desde abajo con la Just Transition Alliance (JTA), fundada en 1997 como alianza de sindicatos y organizaciones de justicia ambiental, lideradas por personas racializadas, migrantes e indígenas de comunidades “fenceline”, las que viven pared con pared con refinerías, in-

La transición debe reparar daños y redistribuir el poder, y quienes más sufren deben liderarla



cineras y corredores logísticos. Su planteamiento es inequívoco: no hay zonas de sacrificio; la transición debe reparar daños y redistribuir poder, y quienes más sufren la contaminación deben liderar las soluciones. Esa es la intersección: clase, raza, género, salud y territorio, frente a un capitalismo fósil que ordena la muerte por código postal.

Las “principios” que difunde la alianza —y que hoy inspiran a redes de justicia climática— colocan al frente a trabajadoras de primera línea y comunidades de primera fila; exigen compensaciones justas, prevención de la contaminación y democracia económica (propiedad comunitaria, cooperativas de energía, control local de la planificación). Esta mirada decolonial rompe con las transiciones dirigidas desde arriba que externalizan costes al Sur Global y a los barrios empobrecidos.

Cooptación y letra pequeña

Con el término en boca de gobiernos y empresas, aumentó la cooptación: planes que se llaman “justos” pero recortan derechos, ofrecen reciclajes exprés a empleos peores y dejan fuera a subcontratas, temporales y cadenas globales de suministro. Al mismo tiempo, zonas mineras o comarcas industriales reciben fondos sin mecanismos reales de control comunitario, mientras megaproyectos “verdes” replican ex-

tractivismos (litio, eólica offshore sin participación local, corredores logísticos que expulsan vecindarios). La Transición Justa no es un logo: es conflicto social organizado para decidir qué, cómo y para quién producimos.

La transición será justa y obrera, o no será

La Transición Justa nació del instinto solidario de la clase trabajadora: nadie debe pagar con su salario, su salud o su barrio lo que otros han decidido contaminar. Hoy, en plena emergencia climática, esa idea solo será verdadera si es decolonial e interseccional: con trabajadoras precarizadas, pueblos indígenas, migrantes y comunidades racializadas en la vanguardia, y con control social sobre inversiones y modelos productivos. No hay empleos en un planeta muerto, sí; pero tampoco hay justicia si la transición repite las mismas violencias.

La IWW aporta además una lección organizativa: la transición no se negocia solo en despachos; se conquista en los centros de trabajo y en los territorios, construyendo alianzas y huelgas climáticas que unan sectores y escalas. Ese “ecosindicalismo” —clase y ecología a la vez— devuelve al sindicalismo su papel histórico: planificar la economía desde las necesidades humanas y los límites ecológicos. ■

Pedro Coria
Just Transition Alliance

Eunice Foote: la feminista que encendió la ciencia del clima (y a la que borraron del relato)

Un porche en Seneca Falls, 1856. Dos cilindros de vidrio, cuatro termómetros, una bomba de aire. Eunice Newton Foote coloca los tubos al sol y anota: el dióxido de carbono se calienta más que el aire común y tarda mucho más en enfriarse.

De ese gesto doméstico —radical y lúcido— brota una idea que hoy damos por obvia: si aumenta el CO₂ en la atmósfera, sube la temperatura del planeta. Foote lo escribió con todas sus letras en un artículo breve y pionero: “Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays”.

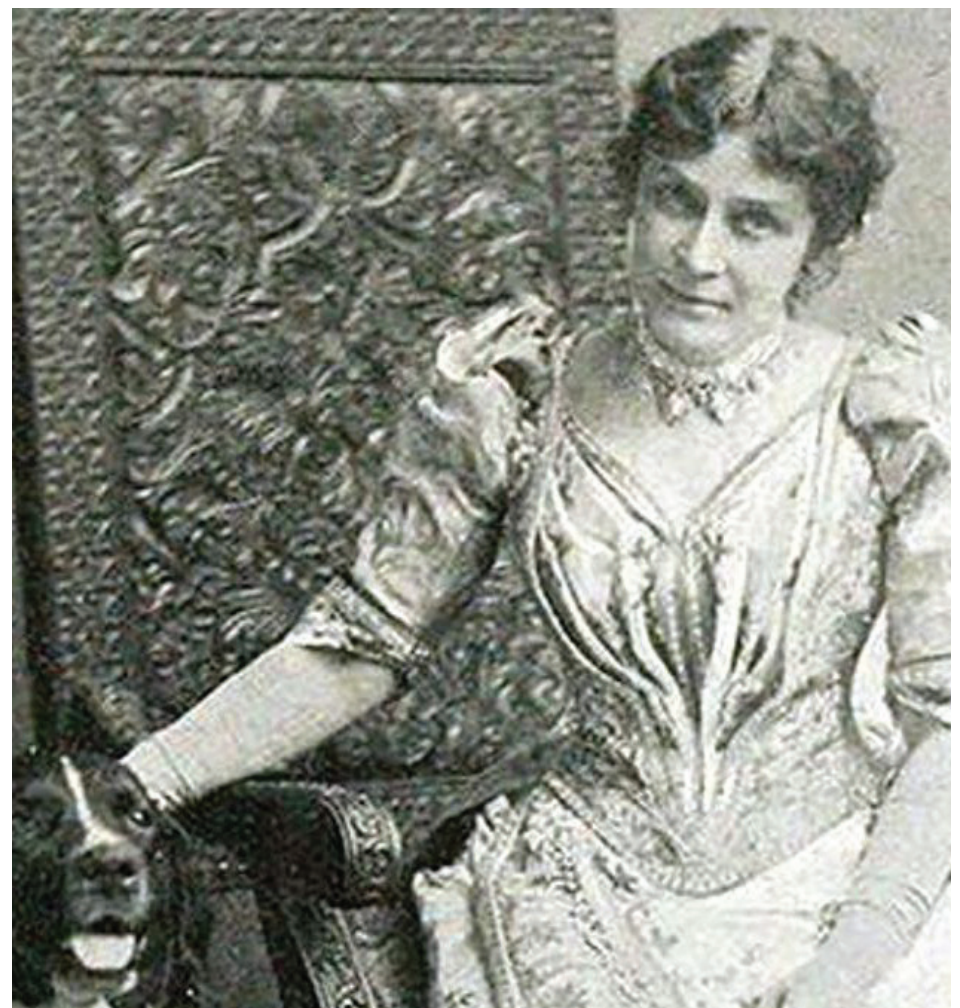
Foote no fue una casualidad de laboratorio. Fue Progresista, fue feminista, fue sufragista. En 1848 participó en la Convención de Seneca Falls —la primera gran asamblea por los derechos de las mujeres en Estados Unidos— y su firma figura entre las primeras del Declaration of Sentiments. También integró el comité editorial que preparó las actas de aquella reunión que sacudió el orden patriarcal. La ciencia que practicaba en casa formaba parte de una misma rebeldía pública: conocimiento y derechos, juntos.

Volvamos al experimento. Foote comparó cómo se calentaban, bajo el sol, recipientes con aire húmedo, aire seco, hidrógeno y “ácido carbónico” (CO₂). Observó que el cilindro con CO₂ alcanzaba temperaturas mayores y retenía el calor más tiempo. De ahí dedujo su hipótesis climática: una atmósfera con más CO₂ daría a la Tierra “una elevada temperatura”. En lo esencial, estaba anticipando la lógica del efecto invernadero. Tres años después, en 1859, John Tyndall publicaría sus

célebres mediciones de absorción infrarroja y se ganaría para siempre el título de “padre” de la ciencia del clima. La discusión historiográfica actual no niega la solidez experimental de Tyndall; recuerda, sencillamente, que Foote llegó antes al vínculo entre composición atmosférica y calentamiento.

¿Por qué entonces casi nadie conoció su nombre durante más de un siglo? Porque Foote no presentó su propio trabajo ante la comunidad científica. El 23 de agosto de 1856, en la reunión de la AAAS en Albany, fue Joseph Henry —secretario fundador del Smithsonian y amigo de la familia— quien leyó su papel. Abrió con una frase que hoy suena a consigna: “La ciencia no tiene ni patria ni sexo”. Y, sin embargo, en la crónica de prensa de aquel día minimizó las implicaciones del hallazgo. Foote no pudo leer; su artículo tampoco fue incluido en las actas de la asociación. Estructuras y prejuicios hicieron el resto.

**Avanzar en la
transición ecológica
sin feminismo es
repetir el mismo error
que borró a Foote**



La historia empezó a corregirse en 2011, cuando el geólogo Raymond Sorenson rastreó fuentes decimonónicas y devolvió a Foote al mapa de la ciencia climática. Desde entonces, museos, revistas y sociedades científicas han ido reconstruyendo su legado. En 2022, la American Geophysical Union creó la Eunice Newton Foote Medal for Earth-Life Science, un premio anual que lleva su nombre. No es solo un gesto simbólico: es un recordatorio de que las genealogías científicas también se escriben con silencios y que esos silencios tienen género.

Foote encarna, además, una intuición política que hoy resulta clave para los movimientos climáticos: el conocimiento no es neutral si se niega quién puede producirlo y en qué condiciones. La misma mujer que midió el calor del CO₂ en el porche de su casa fue una activista que exigía voto, propiedad y voz para las mujeres.

En su biografía, ciencia y derechos caminan en paralelo: en una sociedad que devaluaba la inteligencia femenina, experimentar con gases y escribir sobre clima era también disputar el reparto del poder. Por eso su historia resuena con la agenda ecofeminista: el patriarcado que expulsó a las mujeres de la ciencia

es primo hermano del que legitima un modelo fósil que precariza vidas y territorios.

Invitamos a interpretar este rescate histórico con mirada situada. No se trata solo de “hacer justicia” con una pionera; se trata, además, de entender cómo las ausencias condicionan lo que sabemos y lo que decidimos. Si hubiéramos aprendido antes a escuchar —a Foote y a tantas otras—, quizá habríamos reaccionado con más rapidez frente a las evidencias físicas del calentamiento. Hoy la física atmosférica confirma, con una contundencia abrumadora, aquello que Foote entrevió: más CO₂ implica más calor. La incertidumbre no está en el “sí”, sino en el “cuánto” y, sobre todo, en el “cómo” vamos a actuar.

La lección final es doble. Primero, sobre el método: la ciencia es proceso colectivo, pero necesita relatos completos para no reproducir jerarquías. Segundo, sobre la política: avanzar en transición ecológica sin feminismo —sin democratizar quién investiga, decide y se beneficia— es repetir el error que borró a Foote. Que su nombre vuelva a los libros no es nostalgia; es brújula. Nos recuerda que el futuro climático también depende de qué voces ponemos en el centro. Y esa, hoy, es una decisión inaplazable. ■

Olmo Blanco
Fund. Terram (Chile)

De norte a sur, de este a oeste. Cueste lo que cueste

De Yasuní al Parlamento Xinka y Lamu, las luchas que combinan asambleas comunitarias, acción directa y litigio estratégico están deteniendo o encareciendo megaproyectos fósiles y mineros. El precio: criminalización, violencia, campañas de deslegitimación y asesinatos de activistas.

De los glaciares andinos al gran río, de las asambleas en Guatemala a la costa suajili: cuando el territorio decide, la maquinaria extractiva se atasca. En Ecuador, un referéndum ordenó dejar el crudo bajo tierra en Yasuní. En Guatemala, el Parlamento Xinka rechazó reactivar la mina Escobal tras un proceso de consulta. En Kenia, los tribunales ratificaron la revocación de la térmica de Lamu. Tres golpes, un hilo común: acción directa + autogobierno + litigio. No es fórmula mágica, pero abre puertas que la política de moqueta cerró durante décadas.

El movimiento que mueve el clima sabe dónde duele: cuellos de botella. Minas, oleoductos, vías, puertos, megabalsas, subestaciones. Ahí actúan—con repertorios distintos—Ende Gelände bloqueando carbón y gas en Alemania; Les Soulèvements de la Terre “desarmando” dispositivos agroindustriales en Francia; o Rising Tide y redes afines paralizando el mayor puerto carbonero del mundo en Australia con miles de kayaks. En África Oriental, #StopEACOP impulsa desfinanciación del oleoducto Uganda-Tanzania, al precio de detenciones constantes. Interrumpir flujos funciona. Por eso la respuesta penal se dispara.

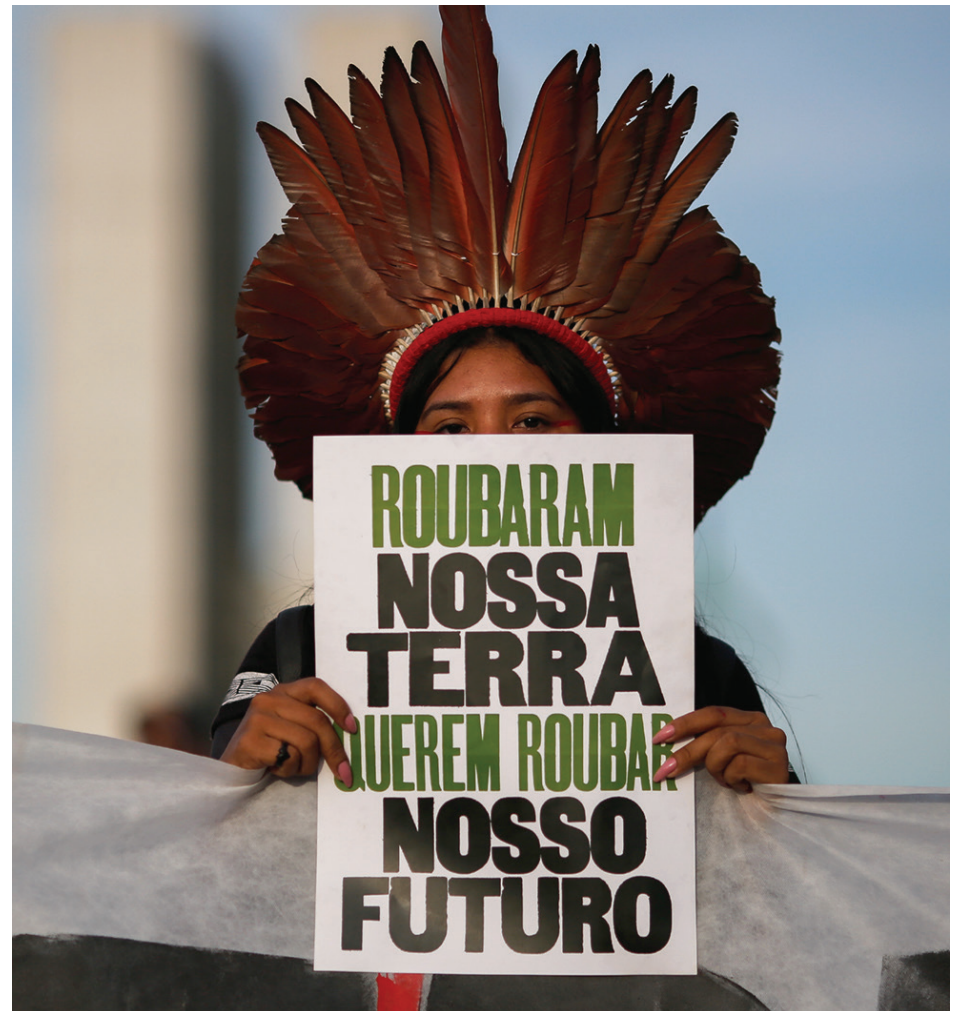
La cara luminosa del balance se escribe en plural. Panamá cerró una mina de cobre y frenó arbitrajes millonarios con una movilización transversal. Colombia mostró que una consulta popular en Cajamarca puede bloquear La Colosa y encadenar decisiones administrativas y judiciales. Perú cerró Conga con una sentencia por daño irreparable, mientras el Corredor Minero del Sur revela el conflicto crónico: bloqueos, procesos, absoluciones parciales y cansancio social. México mantiene en pie El Frente de Pueblos en De-

fensa de la Tierra y el Agua frente al Proyecto Integral Morelos; en el Istmo de Tehuantepec, pueblos Binnizá e Ikoots disputan parques eólicos y el corredor interoceánico con asambleas y recursos legales. Brasil vio a la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) tumbar en el Supremo el “Marco Temporal” que legisla las demarcaciones de tierras.

La cara oscura no se maquilla. Berta Cáceres en Honduras y Samir Flores en México recuerdan que defender el territorio se paga con vidas. En EE. UU., Jessica Reznicek y Ruby Montoya cumplen condenas con agravantes de “terrorismo” por sabotajes al oleoducto de Dakota sin daños a personas. En Atlanta, Stop Cop City fue condenada según la Ley RICO. En Australia, Nueva Gales del Sur aprobó un paquete “antiprotesta”; en Alemania, la inteligencia interior vigila la desobediencia masiva. Lección: cuanto más se golpea infraestructura estratégica, más duro pega el aparato penal. La respuesta no es épica aislada, sino organización: defensa jurídica, fondos de resistencia, protocolos de seguridad, rotación de portavocías y mayorías sociales que vuelvan público cada conflicto.

Este ecosistema tiene genealogía. Earth First! nombró sin complejos el green anarchism: grupos de afinidad, campamentos, sabotaje simbólico, autoformación. Ende Gelände perfeccionó el manual de masas: “dedos/co-

Defender el territorio y el clima, en muchos países, se paga con la vida



lumnas”, acuerdos de acción, logística de cuidados y bloqueos prolongados. Les Soulèvements de la Terre heredó de la ZAD la combinación de ocupación, bloqueo y “desarme” hídrico. Ese ADN libertario—horizontalidad, apoyo mutuo, delegación revocable, acción directa—resuena sin eurocentrismo en las asambleas indígenas del Sur global: Parlamento Xinka, organizaciones Waorani, APIB, guardias comunitarias y consultas vinculantes. Misma gramática, otros acentos.

Desde la península, conviene mirarse al espejo. Solidari@s con Itoiz (Navarra, 1996) cortaron cables y pararon un embalse: acción audaz, pública y no violenta que cambió el relato. Futuro Vegetal colocó las “emisiones de lujo” en el centro con acciones contra jets y cadenas de suministro, asumiendo alto coste judicial a cambio de un debate impostergable. En Portugal, Climáximo aterrizó el método Ende Gelände en Sines: desobediencia masiva y logística cooperativa. No hay atajos: organización sostenida, no fognazos.

¿Qué aprendemos para una transición justa con acento libertario? Que las victorias llegan cuando la comunidad manda, la acción directa interrumpe los flujos y el litigio abre puertas. Que el costo —cárcel, estigma, violencia— es real y debe presupuestarse como parte de la estrategia. Que la co-

herencia exige cortar la complicidad del Norte global: dejar fuera combustibles fósiles amazónicos y cadenas de suministro manchadas, condicionar comercio y finanzas al respeto de derechos, apoyar con recursos directos y sin tutelas a quienes cuidan bosques y ríos, blindar a las personas defensoras. Y ordenar nuestra casa: reducir consumo, desplegar renovables con garantías, democratizar dónde y cómo se instalan.

Para el sindicalismo combativo y los movimientos sociales, hay caja de herramientas: asambleas con mandato; grupos de afinidad coordinados; columnas múltiples para repartir riesgo; campamentos con cocina, salud y comunicación popular; equipos legales desde el minuto cero; y fondos de resistencia para el día después. No es romanticismo: es logística de la esperanza.

Bloquear para vivir. Ese es el verbo que conecta Yasuní con Lamu y con las asambleas Xinka; los kayaks de Newcastle con las ocupaciones de minas en Lusacia; las radios del Cauca con las cocinas de un campamento en la Beauce. Ni un grado más, ni un derecho menos. La transición justa no se concede: se arranca. Y se sostiene con cuerpos, urnas, códigos legales y solidaridad organizada. Aquí y allí. En el Sur global que ya cambia las reglas y en nuestras calles, donde se decide si ese cambio llega a tiempo. ■

Redacción

Flotilla Yaku Mama: la selva navega contra el petróleo

De los glaciares andinos al gran río. Desde El Coca, en el alto Napo, una flotilla indígena avanza hacia Belém con un mensaje nítido: sin fin de los combustibles fósiles y sin derechos para los pueblos que cuidan la Amazonía, no hay transición.

Se llama Yaku Mama —“Madre Agua”, en quechua— y su símbolo es la anaconda, dueña ancestral del río. No es folclore: es estrategia política en movimiento. Mito y memoria funcionan como brújula para una travesía que, más que viaje, es un llamado a pensar el clima desde el cauce, no desde el mármol de las cumbres.

La travesía arrancó el 16 de octubre en Ecuador y recorrerá unos tres mil kilómetros, enlazando comunidades en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. A bordo viajan delegaciones de decenas de organizaciones indígenas y territoriales; hablan lenguas distintas pero comparten un mismo léxico: agua, territorio, vida. Cada escala es asamblea a cielo abierto: se comparan pruebas de derrames, tala, minería aurífera ilegal y acaparamiento; se acuerdan mensajes para la COP y se homenaja a quienes han sido asesinados por defender el territorio. La diferencia con la diplomacia de moqueta es abismal: aquí hablan quienes ponen el cuerpo y conocen el río por su olor, su color y la forma en que rompe las orillas.

El gesto inaugural fue un funeral por los combustibles fósiles. No fue metáfora menor: la “era del petróleo” debe terminar y la Amazonía no puede seguir siendo zona de sacrificio para sostener modos de vida ajenos. La ceremonia, hecha de cantos y silencios, condensó una verdad incómoda: el petróleo que sale de la selva vuelve como humo y como enfermedad. La hoja de ruta exige parar la expansión petrolera y gasífera y poner fecha a su salida ordenada,

con garantías sociales y ambientales reales, sin atajos de marketing verde.

La flotilla lleva un pliego de reclamaciones construido desde abajo. Pide una transición justa con consentimiento libre, previo e informado en cualquier proyecto. Exige financiación directa, sin intermediarios, para quienes protegen bosques y ríos; reclama protección efectiva para pueblos en aislamiento y para las y los defensores, y el fin de la violencia que los acorrala. Señala las falsas soluciones conocidas: mercados de carbono sin derechos, monocultivos “neutros” que expulsan comunidades y megaproyectos renovables impuestos con la misma lógica extractiva.

El río es también una escuela política. La Yaku Mama entrelaza Yasuni y Loreto, el Napo y el Amazonas, glaciares río arriba y sequías río abajo. En las orillas se organizan talleres de cartografía social y monitoreo comunitario; mujeres y jóvenes registran la calidad del agua, marcan puntos de contaminación, reconstruyen desplazamientos y piensan economías que no destruyan el bosque. La transmisión de saberes ocurre al ritmo de los remos y del fogón: se discuten acuerdos, se entrenan portavocías, se ensayan mensajes. Hay propuesta, no solo denuncia: autogobierno territorial, recuperación de semillas, manejo del agua con ciencia ancestral y control social de los bienes comunes.

Desde el Estado español, el espejo devuelve una pregunta incómoda. Nuestra demanda de energía y materias primas, nuestras importaciones y cadenas de suministro alimentan el extractivismo que la



Nuestra demanda de energía y materias primas alimentan el extractivismo que la Flotilla denuncia

flotilla denuncia. Coherencia es cerrar la puerta al petróleo y al gas amazónicos; condicionar comercio y finanzas al respeto estricto de los derechos indígenas; apoyar con recursos directos y sin tutelas a las comunidades que conservan la vida; y blindar a las personas defensoras. También implica ordenar nuestra casa: reducir consumo energético, apostar por renovables con garantías y cortar la complicidad financiera con proyectos que convierten territorios ajenos en vertederos.

Para el sindicalismo combativo y los movimientos sociales, el mensaje entra de lleno en la transición justa. No hay justicia climática si la factura la pagan los de siempre. La flotilla recuerda que el cambio de modelo no es consigna, sino cadena de decisiones: de dónde viene la energía, quién

decide, dónde se colocan las infraestructuras, quién se queda beneficios y quién asume daños. La transición, si merece el nombre, debe redistribuir poder, empleo y riqueza, reconocer propiedad y control territorial indígenas y abrir espacios reales de decisión para las mayorías populares.

Hay, además, un aprendizaje de método. Yaku Mama demuestra que las coaliciones amplias son posibles cuando el centro no es el logo, sino el territorio. La unidad se fabrica con cuidados: seguridad para defensoras, radios comunitarias, cocinas colectivas, logística que piensa en niñas, niños y mayores, tiempos de duelo y de fiesta. “Zarpamos no para conquistar, sino para conectar: para que el mundo, por fin, escuche la voz de la Amazonía”. La anaconda despierta y avanza. Si llega a Belém con los remos en alto y la palabra en pie, no será solo para reclamar; será para recordarnos que el futuro del río —y del clima— también depende de lo que hagamos aquí. ■

Manuela Mascarinas
CIMI Brasil

Rojo y Negro | Especial noviembre 2025
Publicación Mensual Anarcosindicalista

DIRECCIÓN: Miguel Ángel Movilla Lobo
(direccion@rojonynegro.info)

COORDINACIÓN: Andrés R. Amayuelas
(amayuelas@gmail.com)

MAQUETACIÓN: Paqui Arnau
(rojonynegro@cgt.org.es)

DISEÑO: Sara Pintado y Jazmin E. Gell
REDACCIÓN: Sagunto, 15, 1. 28010 Madrid.
Teléfono: 914 470 572
(encuestas@cgt.org.es)



DERECHOS SUSCRIPTORES/AS: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, los datos personales, nombre y dirección de las suscriptoras/es son incorporados a un fichero automatizado, debidamente notificado ante la Agencia de Protección de Datos, cuyo titular es el Secretariado Permanente de la CGT, y su única finalidad es el envío de esta publicación (Rojo y Negro). Toda persona suscrita al Rojo y Negro podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante comunicación remitida al Secretariado Permanente de la CGT, a la dirección electrónica envios@rojonynegro.info o a C/ Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. Si la suscripción a esta publicación es conforme a su condición de afiliado/a a la CGT, el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el sindicato territorial al que se encuentre afiliado/a siendo éste el encargado de ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.